

Honorable Magistrado(a):

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA – SALA LABORAL

E.S.D

RADICADO: 11001310503220220005801

DEMANDANTE: ORLANDO CARREÑO CASTILLO

DEMANDADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES Y COLFONDOS S.A PENSIONES Y
CESANTIAS

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

LAURA NATALIA GUERRERO VINCHIRA, mayor de edad, domiciliada y residente en Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.014.208.534** de **Bogotá** portadora de la T.P. No. **305.872** del C.S. de la J, obrando en mi condición de apoderada judicial Sustituta de la Administradora Colombiana de pensiones –COLPENSIONES- Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial vinculada al Ministerio de Trabajo de conformidad con el poder de sustitución a mi conferido, me permito indicar lo siguiente:

Encontrándome dentro del momento procesal oportuno me permito reiterarme en cada uno de los puntos sustentados tanto dentro de la contestación de la demanda como en los alegatos de conclusión presentados en las instancias procesales pertinentes, solicitándole se confirme el fallo proferido por el juez 32° laboral del circuito, toda vez que en el presente caso no existen elementos que evidencien vicios del consentimiento o dolo que permitan declarar la ineficacia de la afiliación realizada por la demandante ante la A.F.P Colfondos S.A en el año 2001, en tanto obra como soporte de dicha afiliación las cotizaciones efectuadas por el demandante de manera libre, voluntaria y espontanea, por lo que se tiene que dicha afiliación es eficaz y produce pleno efecto jurídico entre las partes, en tanto obra como soporte de dicha afiliación las cotizaciones efectuadas por el demandante de manera libre, voluntaria y espontanea, por más de 20 años, así como la firma del formulario de afiliación que acredita la aceptación voluntaria, libre y sin presión del demandante de

construir pensión en un fondo privado, medio consenso sobre la información ofrecida, las condiciones y características del RAIS.

Así mismo, es importante resaltar que el traslado efectuado por la demandante del RPM al RAIS en el año 2001 se realizó en virtud de la libertad de escogencia de régimen consagrado en el artículo 13 de la ley 100 de 1993 y teniendo en cuenta que para el momento de dicho traslado el demandante no se encontraba inmerso en ninguna prohibición legal para efectuar el traslado.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el demandante realizó aportes por más de 20 años bajo este régimen y no se observa ninguna solicitud de re-asesoría en relación a duda manifiesta de este régimen; al igual su señoría se observa que la nulidad no se alegó dentro del término a que se refiere el artículo 1750 del Código Civil, norma que señala que el plazo para pedir la rescisión durará cuatro años, los cuales se contarán, en el caso de error o de dolo desde el día de la celebración del acto o contrato 4 años, que es un lapso más que suficiente para estar de acuerdo y conforme con el contrato realizado, y aún más cuando se confirma que se recibieron los extractos por parte de las AFP los cuales señala la demandante en el interrogatorio de parte, indicando que los revisaba y entendía los valores aportados.

Aunado a lo anterior, no debe olvidarse que la afiliación es un contrato bilateral en el cual se establecen obligaciones recíprocas entre esas Decreto 2241 de 2010 en el que el afiliado debe informarse con anterioridad a la afiliación.

Así mismo su señoría, no debe perderse de vista que el artículo 167 del C.G.P indica como regla general *"que corresponde a cada parte probar el supuesto de hecho que exhibe"*. Sin embargo, en el caso en concreto no existen pruebas suficientes que den por acreditado un vicio en el consentimiento tal y como lo alega en su escrito demandatorio, partiendo del hecho que quien debe probar es la parte demandante.

Ahora bien, sobre la inversión de la carga de la prueba, como lo indica el artículo 167 del CGP y la Corte Constitucional en sentencia C-086 de 2016 que analizó la constitucionalidad del citado artículo estableció en dicha oportunidad que *"solo atendiendo las situaciones particulares del caso, el*

Calle 93B # 11a-44 Edificio Parque 93-Oficina 404 / Tel.: 6226121 Cel. 3172577654 / E-mail: info@yencesalamanca.co

juez puede invertir la carga de la prueba exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias”.

Así las cosas, se tiene que el Sr. ORLANDO CARREÑO CASTILLO suscribió formulario de afiliación al RAIS en el año de 2001, momento para el cual, la obligación del fondo solo era la de brindar información y sería el afiliado quien determinaría a que fondo realizar sus aportes a pensión, información que se realizaba de forma verbal. Por lo que resulta desmedido exigir al Fondo privado que hubiere realizado una proyección pensional o imponer el deber de asesoría y buen consejo diferente al establecido en la ley cuando no se había impuesto esta exigencia en la normatividad vigente.

Por lo tanto, en el presente caso no es posible invertir la carga de la prueba y exigirle al fondo privado acreditar con documentos y proyecciones pensionales un debido asesoramiento pues seguramente para esa época no se exigía más allá de una simple información brindada por el asesor comercial, por lo que imponer cargas adicionales a las previstas en las leyes de la época se constituye en una situación de carácter imposible.

Aunado a lo anterior, debe resaltarse que no es razonable ni jurídicamente válido imponer a las administradoras obligaciones y soportes de información no previstos en el ordenamiento jurídico vigente al momento del traslado de régimen, pues tal exigencia desvirtúa el **principio de confianza legítima**, teniendo en cuenta que **el principio de legalidad y el debido proceso**, no consisten solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se juzga.

Me permito señalar que, del interrogatorio de parte, se pudo extraer que no existió un error de hecho sino de derecho, que tal como señala la Corte Constitucional en sentencia C – 993 de 2006, no vicia el consentimiento y por ende deberá tenerse como válida su afiliación al RAIS; el cual con el paso del tiempo fue subsanado, no solo por la voluntad que plasmó el demandante al momento de suscribir el formulario de afiliación, sino que su vocación de permanecer en el régimen privado se dio por un tiempo prolongado, y su inconformidad esta básicamente orientada al monto

pensional que recibiría en Colfondos S.A y el que podría recibir en Colpensiones, sin embargo, de acuerdo a lo indicado en el interrogatorio de parte, no ha indagado directamente con Colpensiones, cuál será el monto pensional que recibiría en el RPM y solo a través de información entregada algunos compañeros, considera que le sería más favorable pensionarse con el RPM.

Aunado a lo anterior, es dable indicar que el afiliado ostentaba un deber de información que, de los hechos de la demanda, solo hasta el año 2014, consulto sobre su situación pensional en Colpensiones, fecha para la cual ya se encontraba dentro de la prohibición legal de traslado.

Así mismo, cabe resaltar que la CSJ en sentencia SL 2810 de 2019 indico que se genera una afiliación tacita al guardar silencio ante eventuales incongruencias, lo cual sucede en el presente caso, puesto que el demandante, guardo silencio sobre lo que manifiesta fue omitido por la AFP demandada, a la cual, se encuentra actualmente afiliada.

Así mismo, se debe señalar que el demandante se encuentra inmerso dentro de la prohibición legal contemplada en el artículo 2 de la ley 797 de 2003, toda vez que elevó solicitud de traslado al RPM administrado por Colpensiones el 8 de septiembre de 2021, fecha para la cual contaba con 60 años, situación que imposibilita a mi representada a tener a la accionante como afiliado al RPM, pues tal situación contravendría no solo disposiciones de carácter legal sino también se encontraría en contravención del Principio Constitucional de la Sostenibilidad Financiera del Sistema lo que acarrearía una descapitalización del fondo común administrado por COLPENSIONES.

Aunado a lo anterior, se tiene que el demandante al no contar con 15 años de cotizaciones para el 1º de abril de 1994, tal como se puede evidenciar de la documental que reposa en el expediente; por lo que no quedaría otra alternativa sino la de concluir que el señor ORLANDO CARREÑO CASTILLO se encuentra inmerso en la prohibición legal de traslado, por ende, resultaría a todas luces improcedente por parte de mi representada tener como afiliado al demandante al RPM, salvaguardando el Principio Constitucional de SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA.

Conforme a lo anterior, el demandante en el presente caso no es beneficiario del régimen de transición para proceder su traslado en cualquier tiempo como lo manifiestan las Sentencias C-789 de 2002, C-1024 de 2004, SU-062 de 2010 y la SU 130 de 2013 al indicar que la única condición prevista que no exige un límite de tiempo a efectos de solicitar el traslado de régimen, es que el afiliado acredite que es beneficiario del régimen de transición al haber efectuado cotizaciones por 15 años con anterioridad al 1 de abril de 1994, por lo que no tenía una expectativa pensional y no se afectaron derechos adquiridos.

Ahora se debe de tener en cuenta el equilibrio financiero del sistema, para lo cual me permito se debe tener en cuenta lo indicado en sentencia SU-062 de 2010 en relación al estudio de rentabilidad; por medio del cual señala que el cálculo de rentabilidad es una operación tendiente a determinar si el afiliado que desea trasladarse del RAIS al RPM y que le faltaren menos de 10 años para pensionarse, cumpla con el requisito que señala que el ahorro realizado en el primero no debe ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media, y así poder establecer si procede o no el traslado de régimen, medida que se adopta en aras de proteger la sostenibilidad del sistema principio contemplado en el art. 48 de la constitución política.

De igual manera Honorables Magistrados, debe aclararse que, de conformidad con los hechos de la demanda y los documentos obrantes en el expediente, se evidencia que el demandante nunca estuvo afiliado al ISS hoy Colpensiones, puesto que al momento del traslado se encontraba afiliado al RPM con CAJANAL, por lo que en el presente caso estamos ante una afiliación inicial del demandante al ISS hoy Colpensiones, razón por la cual su señoría debe tenerse en cuenta que uno de los efectos jurídicos de la ineficacia es retrotraer las cosas a su estado inicial, lo cual no es posible en el presente caso debido a que el demandante nunca estuvo afiliado al ISS, por lo que debe tenerse en cuenta que en estos casos Colpensiones es un tercero de buena fe y por lo tanto no le son oponibles las consecuencias jurídicas de la solicitada ineficacia.

Por lo que debe tenerse en cuenta que COLPENSIONES nada tuvo que ver en el negocio jurídico celebrado entre el demandante y las AFP demandada, es decir, no existió injerencia alguna por parte de la entidad para que el demandante tomara la decisión de trasladarse de régimen, máxime si se tiene en cuenta que el demandante nunca estuvo afiliado al ISS, puesto que se encontraba afiliado a la Caja de Previsión Nacional – Cajanal al momento del traslado, por lo que en caso de alguna eventual condena la llamada a responder sería la AFP COLFONDOS S.A y no COLPENSIONES, aunado al hecho de que la teoría del daño manifiesta que quien lo causa es quien debe repararlo, así las cosas no es COLPENSIONES quien debe asumir las consecuencias de la supuesta falta de información por parte de la AFP COLFONDOS S.A al momento del traslado ni durante su afiliación a este régimen

Por último, Honorable Magistrados, es de tener en cuenta el principio de relatividad jurídica, toda vez que COLPENSIONES es un tercero en el acto jurídico que celebro el actor y el fondo privado, los actos jurídicos en principio tiene efectos inter partes, por lo cual independientemente de la decisión adoptada mi representada no puede ser favorecida ni perjudicada con la decisión adoptada.

Conforme a lo previamente expuesto, solicito respetuosamente a su honorable despacho revocar el fallo proferido en primera instancia y en su lugar absolver a Colpensiones de la totalidad de pretensiones incoadas en su contra.

Cordialmente,



LAURA NATALIA GUERRERO VINCHIRA
CC No. 1.014.208.534 de Bogotá
T.P No. 305.872 del C.S de la J